

Documentos
Relacionados con la
Deportación de Extranjeros no
Deseables y el Proyecto
de Ley de Inquilinato

DECRETO NUMERO 65 DE 1926.

(de 23 de Abril.)

por el cual se nombra una Comisión encargada de preparar un proyecto de ley sobre inquilinato.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

a) Que con motivo del alza inmoderada de los alquileres de casas, llevada a cabo el año próximo pasado por gran número de propietarios en las ciudades de Panamá y Colón, se registraron disturbios en la capital de la República, que degeneraron en un verdadero movimiento subversivo contra las autoridades legalmente constituidas y la tranquilidad social;

b) Que aunque el Poder Ejecutivo ha tenido el más vivo deseo de solucionar en una forma justa y equitativa el problema inquilinario, no le ha sido posible obtener un acuerdo entre las partes, por falta de una ley especial que regule las relaciones entre propietarios e inquilinos, como las que existen ya en diferentes países civilizados, y

c) Que, en consecuencia, es necesario que la Asamblea Nacional, en sus próximas sesiones, legisle sobre asunto de tanta importancia, consultando, como es natural, los intereses y derechos del proletariado y de los propietarios en general, para lo cual es conveniente nombrar una Comisión que se encargue, desde ahora, de elaborar un proyecto que sirva de base a los Legisladores para discutir y expedir una ley que satisfaga debidamente las legítimas aspiraciones de los asociados,

DECRETA:

Artículo 1o. Créase una Comisión compuesta por los señores Dr. Heliodoro Patiño, Jorge Domingo Arias, Enoch Adames V., Anastasio Ruiz N. y Gil F. Sánchez, encargada de preparar un proyecto de ley sobre inquilinato, que será sometido a la consideración de la Asamblea Nacional en sus próximas sesiones ordinarias.

La Comisión tendrá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, elegidos entre sus mismos miembros.

Artículo 2o. Destínase el salón de sesiones de la Asamblea Nacional para que sirva de lugar de reunión a la expresada Comisión, cuyos miembros devengarán del Tesoro Nacional, en concepto de honorarios la suma de diez balboas (B. 10.00) por cada sesión a que asistan.

Artículo 3o. Los gastos que ocasione el cumplimiento del presente Decre-

to, se imputarán al Artículo 192, Capítulo VI, Departamento de Gobierno y Justicia, del Presupuesto de Gastos de la actual vigencia.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá a los veintitrés días del mes de Abril de mil novecientos veintiseis.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 74 DE 1926

(de 4 de Mayo)

por el cual se nombra un miembro de la Comisión encargada de preparar un proyecto de ley sobre inquilinato.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Nómbrase al Dr. Carlos Icaza A., miembro de la Comisión encargada de preparar un proyecto de ley sobre inquilinato, en reemplazo del señor Anastasio Ruiz N., quien se ha excusado de aceptar el cargo.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los cuatro días del mes de Mayo de mil novecientos veintiséis.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

DECRETO NUMERO 102 de 1926

(de 12 de Junio)

por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Nómbrase al señor Francisco Arias P. miembro de la

Comisión encargada de preparar un proyecto de ley de inquilinato, en reemplazo del señor J. D. Arias, quien se ha excusado de aceptar dicho cargo.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a los doce días del mes de Junio de mil novecientos veintiséis.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

PROYECTO DE LEY
sobre inquilinato.

La Asamblea Nacional de Panamá,

DECRETA:

Artículo 1o. Para resolver y dirimir todas las controversias, conflictos y quejas que surjan entre propietarios e inquilinos por motivo del contrato de arrendamiento de viviendas, verbal o escrito, celebrado entre ellos, habrá una Junta de Inquilinato en la capital de la República y en cada capital de Provincia donde fuere necesario, a juicio del Poder Ejecutivo.

Artículo 2o. Las Juntas de Inquilinato se compondrán de cinco miembros principales y cinco suplentes en la capital de la República, y de tres miembros principales y tres suplentes en las otras Provincias. En la Junta de la capital de la República habrá dos representantes de los propietarios, dos de los inquilinos y uno del Poder Ejecutivo. En las Provincias habrá un representante de cada una de estas entidades.

Artículo 3o. Los propietarios e inquilinos designarán a sus representantes y a los suplentes respectivos en Asambleas Generales de unos y otros convocadas con la debida anticipación por el Secretario de Agricultura y Obras Públicas. La elección se hará por aclamación y por mayoría de votos. El representante del Poder Ejecutivo lo nombrará el Presidente de la República y será Presidente de la Comisión.

Artículo 4o. A la entidad que deje de nombrar sus representantes cuando ya dos lo han hecho, se los nombrarán los representantes de las otras entidades por mayoría de votos. En cualquier tiempo en que la entidad remisa desee nombrar sus representantes, podrá hacerlo, caso en el cual los nombramientos hechos por las otras entidades quedarán insubsistentes.

Artículo 5o. Los propietarios, los inquilinos y el Poder Ejecutivo, podrán remover a sus representantes por motivos justos. A este efecto procederán a reemplazarlos de conformidad con el artículo 3o. de esta Ley y comunicarán lo acordado a la Junta de Inquilinato.

Artículo 6o. Para ser componente de las Juntas de Inquilinos se requieren las condiciones siguientes:

- a) Tener veintiún años cumplidos;
- b) Saber leer y escribir y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

c) No tener parentesco con los otros miembros de la Junta en que vaya a actuar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Artículo 7o. Los componentes de las Juntas de Inquilinato durarán en su cargo un año a contar desde el día 1o. de Octubre de 1926 y otorgarán la promesa de ley ante el Gobernador de la respectiva Provincia.

Artículo 8o. Las faltas temporales de los miembros de las Juntas de Inquilinato serán cubiertas por los respectivos suplentes. Si la falta fuere definitiva y faltaren más de seis meses para que se concluya el período, se procederá a una nueva elección o nombramiento en los términos previstos en el artículo tercero.

Artículo 9o. Las Juntas de Inquilinato actuarán con un Secretario que reúna las condiciones siguientes:

- a) Tener veintiún años cumplidos;
- b) Poseer los conocimientos necesarios para desempeñar bien el destino;
- c) No tener parentesco con los componentes de la Junta dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
- d) Ser notoria su buena conducta.

Artículo 10. El Secretario será nombrado por el Gobernador de la Provincia de la terna que le presentare la Junta de Inquilinato una vez constituida.

Artículo 11. La Junta de Inquilinato tendrá las más amplias facultades para practicar toda clase de diligencias en los asuntos en que intervenga y muy especialmente en los siguientes:

- a) Podrá examinar testigos y tomar declaraciones haciendo uso de los apremios legales;
- b) Podrá practicar visitas domiciliarias de inspección y reconocimiento;
- c) Podrá impedir el arriendo de aquellas casas que en su concepto no reúnen las condiciones de sanidad y seguridad indispensables a las habitaciones;
- d) Podrá imponer multas de cinco balboas o arresto equivalente por infracciones de esta ley.

Artículo 12. Mientras el Poder Judicial no resuelva otra cosa, los fallos y resoluciones interlocutorias y definitivas de las Juntas de Inquilinato serán cumplidas; las autoridades de Policía les prestarán todo el apoyo necesario para ello. Los fallos de las Juntas de Inquilinato serán por mayoría de votos, y los asuntos en que intervengan se tramitarán breve y sumariamente. Los escritos de las partes pueden ir en papel común.

Artículo 13. En todo contrato de arrendamiento de casas para habitación, ya sea verbal o escrito, se considerarán incluidas como indispensables, las siguientes estipulaciones, cuyo cumplimiento estará vigilado por las respectivas Juntas de Inquilinato.

- a) La obligación, por parte del propietario o arrendador, de entregar y mantener la habitación en buenas condiciones de seguridad, limpieza e higiene;
- b) Se expresará claramente al respaldo de los recibos, si el servicio de agua y luz y el aseo de los patios e inodoros, corren a cargo del propietario o arrendador o del inquilino;
- c) Se estipulará claramente la cuantía del arrendamiento y la fecha del pago, la cual no podrá ser sino al vencimiento de cada mes.

Artículo 14. Los propietarios o arrendadores de casas serán responsables civilmente de los perjuicios que les resulten a los inquilinos o sus familiares por accidentes ocurridos en virtud de faltas de seguridad en las casas que habitan, siempre que se les hayan notificado las faltas por medio de la Junta de Inquilinato y que haya vencido el término señalado para subsanarlas.

Artículo 15. Cuando una habitación no reúna las condiciones de seguridad e higiene requeridas de conformidad con los reglamentos respectivos, el ocupante podrá ocurrir en queja a la Junta de Inquilinato de su jurisdicción, la que notificará al propietario o arrendador al recibo de la queja y señalará un día para oír a los interesados. Caso de que la queja fundada, la Junta señalará un término prudencial para que el propietario o arrendador haga las reparaciones del caso. Las reparaciones ordenadas por la Junta de Inquilinato podrán ser ejecutadas por el arrendatario con cargo a las rentas del arrendamiento, cuando el propietario o arrendador no las efectuare dentro del término señalado por la Junta y hasta por la suma que ella indique.

Artículo 16. El gravamen de las casas se cobrará sobre la renta bruta probable así: las casas que produzcan una utilidad neta del 8% o menos de su valor, pagarán el 2% sobre la renta bruta probable anual; y por cada unidad más de utilidad que produzcan anualmente pagarán 1% más de contribución anual.

Artículo 17. La Dirección General de Catastro creada por el artículo 18 de la Ley 29 de 1925, levantará un censo de las propiedades urbanas en que se establecerá: el propietario de la casa; la ubicación de la misma; el número de cuartos o departamentos; el valor declarado en el Registro de la Propiedad y el que tenga en el Catastro; los gastos por impuestos y conservación; el producto bruto probable y el impuesto a pagar conforme al artículo anterior.

Artículo 18. Un propietario o arrendador de casas para habitación sólo podrá desalojar un inquilino en los casos siguientes:

- a) Cuando el inquilino sea objetable por razones de sanidad o moralidad;
- b) Cuando esté en mora;
- c) Cuando el propietario o arrendador se proponga ocupar él mismo la habitación;
- d) Cuando vaya a reconstruirla;
- e) Cuando la venda y así lo exija el comprador;
- f) Por haber expirado el término convencional del arrendamiento.

En este caso el propietario tendrá la obligación de dar al inquilino un aviso al término que regula los pagos.

Artículo 19. Considérase incluso en mora el arrendatario que no pague el alquiler dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento sin que le asista justa causa y siempre que se pruebe que se ha requerido el pago por medio de la Junta de Inquilinato; pero el arrendador no podrá solicitar a la Junta que haga dicho requerimiento sino después de pasados cinco (5) días del vencimiento del arriendo. Siempre que la Junta estime que la falta de pago del arrendamiento se debe a causa justa, proveerá lo conducente para garantizar el pago del arrendamiento una vez que desaparezca la causa de la demora.

Artículo 20. Los lotes desocupados existentes en las secciones urbanizadas de las poblaciones pagarán a partir del 1o. de Enero de 1927 el impuesto de inmuebles a razón del siete y medio por mil de su valor.

Artículo 21. El Gobierno Nacional y las Municipalidades fomentarán el desarrollo de las instituciones cooperativas de edificación que se propongan facilitar la adquisición de la vivienda a los asociados. Los empresarios que se dispongan a construir casas baratas en barrios destinados a los obreros y familias pobres, cuya propiedad puede ser adquirida por estos, mediante el pago parcial del costo más los intereses, tendrán preferencia en los préstamos sobre cédulas hipotecarias que hace el Banco Nacional

Artículo 22. Las casas baratas destinadas a viviendas para obreros y familias pobres que no sean propietarios, cuya propiedad pueda ser adquirida al tenor del artículo anterior, quedarán eximidas del pago del impuesto de inmuebles mientras adquieran la propiedad.

Artículo 23. A falta de individuos o empresas que quieran dedicarse a esta clase de inversiones, el Poder Ejecutivo podrá construir casas para obreros o trabajadores, las que serán alquiladas a precios módicos. También podrá el Poder Ejecutivo, en épocas de crisis de la vivienda, tomar en arrendamiento las casas que le indique la Junta de Inquilinato, para arrendarlas a precios módicos o para alojar en ellas a las personas o familias desvalidas.

Artículo 24. Las Municipalidades cooperarán con el Poder Ejecutivo a la solución de esta crisis de la vivienda. Al efecto el Poder Ejecutivo gestionará ante las Corporaciones Municipales la consecución de los terrenos vacantes en los lugares donde el Gobierno Nacional carezca de ellos.

Artículo 25. Las disposiciones del Código Civil y Judicial, sobre Deshau-cio y Lanzamiento y cualesquiera otras disposiciones contrarias a la letra y el espíritu de la presente Ley, no serán aplicables al contrato de arrendamiento de viviendas. Queda reformado en los términos de los artículos 16 y 20 de esta Ley el artículo 12 de la Ley 29 de 1925 que grava la propiedad inmueble.

Presentada al Exmo. señor Presidente de la República por los suscritos miembros de la Comisión nombrada por Decreto número..... de 1926, hoy trece de Septiembre de mil novecientos veintiséis.

(Fdo.) HELIODORO PATIÑO.—(Fdo.) CARLOS ICAZA A.—(Fdo.) JIL F. SANCHEZ.—(Fdo.) E. ADAMES V.—(Fdo.) F. ARIAS P.

Remitido a la Asamblea Nacional con Mensaje de estilo hoy veintisiete de Octubre de mil novecientos veintiséis, y presentado por el suscrito Secretario de Gobierno y Justicia.

RESOLUCION NUMERO 164.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución No. 164.—Panamá, Septiembre 24 de 1925.

De la información que precede aparecen debidamente comprobados los hechos siguientes:

1o. Que en sesión celebrada el 21 de Noviembre de 1921, el Consejo de Gabinete fue informado por el Presidente de la República, Doctor Belisario

Porras, de que el señor J. M. Blásquez de Pedro, súbdito español, llevaba a cabo una activa propaganda disociadora, según la cual "robarle al burgués no es robar";

2o. Que en esa misma fecha el Consejo de Gabinete dispuso comisionar al Secretario de Gobierno y Justicia, doctor Ricardo J. Alfaro, para que le hiciese ver a Blásquez de Pedro que el Gobierno tomaba nota de esa propaganda y que la reputaba disociadora;

3o. Que a Blásquez de Pedro le fue hecha la notificación ordenada para que a la mayor brevedad posible cesara en tal propaganda, advirtiéndole que de no hacerlo así se le expulsaría del país por quedar comprendido en la prohibición que contiene el artículo 1875 del Código Administrativo;

4o. Que por oficio número 248, de 12 de los corrientes, el Gobernador de la Provincia de Panamá ha dado cuenta al Poder Ejecutivo de que Blásquez de Pedro, según informes del Comandante de la Policía Nacional, en reunión popular verificada el 5 de este mes en la Plaza de Lesseps de esta ciudad pronunció un discurso sedicioso, mejor dicho, un discurso en que proclamaba la bondad de las ideas anarquistas;

5o. Que el informe de que se trata en el punto anterior aparece robustecido por las declaraciones rendidas por los señores Juan José Méndez, Subsecretario de Hacienda y Tesoro encargado del Despacho, y Mario Galindo T., Alcalde del Distrito, quienes aseguran haber oído el discurso de Blásquez de Pedro, el cual se distinguió por "sus ideas disociadoras y cuyas palabras tendían a sembrar en los oyentes el espíritu de subversión";

6o. Que el artículo 1875 del Código Administrativo prohíbe la entrada de anarquistas al país y por lo mismo su residencia en él;

7o. Que el artículo 11 de la Ley 64 de 1925 califica como personas no deseables, sujetos a la expulsión del país, a los que prediquen la transformación de la sociedad por medio violentos, y a los expulsados de otro país como ANARQUISTAS DE CUALQUIER CLASE O DENOMINACION, y

8o. Que como el súbdito español Blásquez de Pedro se encuentra comprendido en las disposiciones legales citadas, el Consejo de Gabinete ha dispuesto que sea deportado del país,

SE RESUELVE:

Ordenar la deportación del anarquista español J. M. Blásquez de Pedro, y comisionar al Gobernador de la Provincia de Panamá para que tome las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a esta orden a la mayor brevedad posible.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 184.

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución No. 184.—Panamá, Octubre 11 de 1925.

En cumplimiento de instrucciones del Poder Ejecutivo, que fueron expe-

didadas en virtud de lo que dispone el artículo 1884 del Código Administrativo, el Gobernador de la Provincia de Panamá dispuso por resolución número 131, de 30 de Septiembre último, prevenir formalmente a los extranjeros Luis F. Bustamante, Dagoberto Ojeda, Carlos M. Céspedes Jr. y Nicolás Terrero que debían abstenerse de ejecutar actos contrarios a las leyes y a las obligaciones contraídas por la República en Tratados públicos y que por lo tanto debían cesar la propaganda subversiva que venían llevando a cabo. Dicha resolución les fue notificada personalmente a los señores mencionados ese mismo día.

El mismo funcionario dictó el 9 de los corrientes la resolución número 136, en el mismo sentido que la anterior, con respecto al extranjero Pío Tamayo, quien también fue debidamente notificado.

Tanto a éste como a aquéllos se les advirtió además que serían expulsados del territorio nacional si continuaban en esa labor disociadora y perniciosa para la tranquilidad pública.

No obstante, el Poder Ejecutivo tiene pruebas de que los extranjeros mencionados han seguido actuando como jefes o directores del movimiento subversivo que culminó en forma trágica el 10 de los corrientes. Así lo acreditan los testimonios de los Agentes de Policía Alberto R. Lassen, Ernesto Rivera O., Aurelio Riquelme y muchos otros que escucharon sus discursos con posterioridad a la prevención que les fue hecha por el Gobernador de la Provincia de Panamá.

Considerado este asunto por el Consejo de Gabinete, se acordó expulsar del país a los extranjeros mencionados, en atención a los hechos de que se deja constancia en esta resolución y en virtud de lo que dispone el artículo 188 del Código Administrativo.

Por tanto,

SE RESUELVE:

Ordenar la deportación de los extranjeros Luis F. Bustamante, Dagoberto Ojeda, Carlos M. Céspedes Jr., Nicolás Terrero y Pío Tamayo.

El Gobernador de la Provincia de Panamá queda encargado del cumplimiento de esta Resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 191

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 191.—Panamá, 26 de Octubre de 1925.

Según informes suministrados a este Despacho por el Gobernador de la Provincia de Panamá, Ruperto Garrido, de nacionalidad española, tomó parte activa y principal en las recientes manifestaciones públicas de esta ciudad, relacionadas con el alza de los alquileres, en las cuales se han proferido amenazas e injurias contra el Presidente de la República y otras autoridades del país

así como contra autoridades y funcionarios de un Gobierno amigo, habiéndose llegado al extremo de excitar a las masas a llevar a cabo un sacudimiento o transformación social por medios violentos. Esta conducta del nombrado Garrido lo coloca en condiciones de ser fundadamente sindicado de los delitos de atentado contra los Poderes de la Nación y de excitación a la guerra civil. Ahora bien, el artículo 1885 del Código Administrativo, modificado por el artículo 12 de la Ley 64 de 1925, dispone que se deporten del país a los responsables de ciertos delitos entre los que están los que se le imputan ahora al señor Garrido. Además, y esto es también importante, el señor Garrido por su conducta se ha constituido en un inmigrante de rechazo, de conformidad con el artículo 1875 del Código Administrativo, modificado por el artículo 10 de la ya expresada Ley 64, razón por la cual también se le debe hacer que abandone el territorio nacional.

Por otra parte, la expulsión de un extranjero, en el caso del expresado artículo 1885 puede llevarse a cabo antes o después del juzgamiento del inculcado, siguiendo la tramitación del artículo 1888 del Código Administrativo, que dice así:

“Para llevar a cabo la expulsión de cualesquiera de los casos previstos en este Capítulo, bastará que se haga constar sumariamente la culpabilidad del extranjero y que se dicte la resolución correspondiente por el Presidente de la República y el Secretario de Gobierno y Justicia, previo acuerdo del Consejo de Gabinete.”

Habiéndose, pues, hecho constar sumariamente la culpabilidad de Garrido y previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

SE RESUELVE:

Extrañar del territorio nacional al español Ruperto Garrido.

El Gobernador de la Provincia de Panamá queda encargado de llevar a cabo el cumplimiento de la presente Resolución.

Comuníquese y publíquese.

R. CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 206

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 206.—Panamá, 23 de Noviembre de 1925.

Vistas las diligencias sumarias levantadas por el Corregidor del Barrio Sur de Colón contra Albano Andrea, Enrique (a) Quiqui, Luis Landi o Antonio Emperador (a) Tado y Ramón Vivanco, todos ellos extranjeros, de donde resulta que dichos sujetos no tienen profesión u oficio, haciendo o renta, y viven sin saberse los medios lícitos y honestos de donde provenga su subsistencia; en consideración a que de conformidad con los artículos 1o. y 2o. de la Ley 76 de 1924, ellos deben ser considerados elementos no deseables; en atención a que la parte final del citado artículo 2o. manda que se deporten del

país los extranjeros que se encuentran en las condiciones de los aquí enumerados, y previo acuerdo del Consejo de Gabinete,

SE RESUELVE:

Deportar, como en efecto se deportan, a los extranjeros cuyos nombres aparecen al principio de la presente Resolución. El Gobernador de la Provincia de Colón queda encargado del cumplimiento de la misma.

Comuníquese y publíquese.

R CHIARI.

El Secretario de Gobierno y Justicia,

CARLOS L. LÓPEZ.

RESOLUCION NUMERO 208

República de Panamá.—Poder Ejecutivo Nacional.—Secretaría de Gobierno y Justicia.—Sección Primera.—Resolución número 208.—Panamá, 26 de Noviembre de 1925.

Con información levantada por el Alcalde del Distrito de Panamá ha quedado establecido que Alberto Balladares, de nacionalidad ecuatoriana, es rufián, lleva regularmente una vida de ocio y ha sido detenido o preso siete veces por sindicársele de igual número de delitos o faltas.

El artículo 1o. de la Ley 76 de 1924, en su ordinal 3o., considera como vagos, entre otros elementos, a los rufianes; y el artículo 2o. de la misma ley, en su parte final, dispone que se consideren a los extranjeros de esta calidad como elemento no deseable y que se les deporten del país. Ahora bien, de la disposición contenida en el artículo 4o. de la misma Ley se desprende que en tales casos se le ordenará primero al extranjero que abandone el territorio nacional dentro de un término perentorio y si no cumpliera esa orden dentro del término fijado, permaneciendo clandestinamente en la República o si burlare después su cumplimiento regresando a él, se le detendrá y dedicará por dos años a los trabajos agrícolas de la Colonia Penal de Coiba y luego se le obligará a salir por la fuerza.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

PRIMERO. Ordenar, como en efecto se ordena, a Alberto Balladares, que abandone el país dentro de los diez días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Mientras tanto quedará sujeto a la vigilancia de la Policía.

SEGUNDO. Si Balladares no cumpliera esta orden dentro del término fijado, será reducido a prisión y dedicado a los trabajos agrícolas de la Colonia Penal de Coiba por dos años, y una vez cumplido ese término, expulsado por la fuerza del país.